EL PROCESO PENAL COMO SISTEMA DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES

Antonio Ma. LORCA NAVARRETE

SUMARIO: I. Preliminar. II. Modo en el que se proyecta el sistema de garantías que ha de desarrollar el proceso penal. III. Recapitulación.

I. PRELIMINAR

No cabe duda de que conjuntamente con cada texto normativo en particular, que contenga una específica y concreta oferta sobre la regulación del proceso penal, es posible hallar un marco constitucional que, en principio, debiera atender a hacer efectivo un determinado marco de relaciones convivenciales presidido por los derechos y libertades que se reconocen a cada ciudadano en particular. Desde esta perspectiva toda Constitución, que se precie de tal, debiera contener auténticas normas jurídicas (y no meras declaraciones programáticas de buenos principios) que la hagan erigirse en norma fundamental y fundamentadora de todo el resto del ordenamiento jurídico incluido, claro está, el procesal; por lo que la norma constitucional debiera ser el único marco de referencia con el que tendrá que contratarse el resto de normas jurídicas.

En base, pues, a este planteamiento tendría que abrirse paso, por tanto, la concepción del proceso como sistema de garantías constitucionales que salvaguardará los derechos y libertades de todos los ciudadanos en aras de evitar situaciones de indefensión, de suerte que tales garantías no se constituyan en un fin en sí mismo, sino en un medio para evitar aquélla. Pues bien, las afirmaciones hasta aquí vertidas pueden servir, sin lugar a dudas, a clarificar en gran medida el actual panorama legislativo acerca del proceso penal y en ellas puede encontrar apoyo una consideración del proceso penal como sistema de garantías con amplio apoyo constitucional en orden a la obtención de la tutela judicial efectiva de los derechos sin que en ningún caso se produzca indefensión. Esta concepción del proceso penal como sistema de garantías surge en el ordenamiento jurídico español a par-

tir, precisamente, de la promulgación de la Constitución española de 1978, por lo que, sin duda, se encuentra aún revestida de cierta novedad,¹ siendo en gran medida rupturista con las corrientes doctrinales españolas preconstitucionales acerca del proceso penal.²

En mi opinión y una vez recobradas o reelaboradas las libertades democráticas, el proceso penal debe adquirir un protagonismo sin duda importante como auténtico sistema de garantías fundamentalmente proyectado hacia la persona del imputado o acusado.

II. MODO EN EL QUE SE PROYECTA EL SISTEMA DE GARANTÍAS QUE HA DE DESARROLLAR EL PROCESO PENAL

Considero que dos son los frentes a los que hay que presentar batalla. En primer lugar hay que apartarse de la idea de que el proceso penal ante todo debe perseguir una finalidad práctica como pudiera desprenderse del propio artículo 1 de la Ley procesal penal española (L.E.Crim) al señalar que “no se impondrá para alguna... sino en virtud de sentencia” o lo que es lo mismo, que no debiera existir proceso penal más que en la medida en que la pena pueda ser actuada.³ En tal sentido quisiera señalar, como ya lo he hecho,⁴ que la finalidad del proceso penal abarca no tan sólo la efectiva imposición de la pena mediante la sentencia de la cual deba nacer un título ejecutivo, sino y además en sentido amplio, el interés fundamental del Estado de que la acción de la justicia penal no quede imprejuzgada, lo cual puede lograrse tanto mediante la sentencia que contiene un fallo condenatorio como absolutorio. Por consiguiente, no es cierto —y en esto invito a la doctrina a que dé un nuevo cambio de planteamientos— que el interés fundamental que determina el proceso penal sea sin más el dirigido a declarar la punibilidad del culpable.

La Constitución española en el artículo 24 proclama la efectiva tutela judicial de los derechos, pero no le impone al Estado, titular del tan manipulado *ius puniendi*, que la promoción de la justicia penal a través del proceso penal debe tener, fíjese el lector, carácter represivo *tout a cour*. Pues, sin duda alguna, no sólo es criticable el régimen

¹ Cfr. Lorca Navarrete, A. Ma., *Derecho procesal penal*, Madrid, Ed. Tecnos 1986, p. 19 y ss.

² *Idem*, p. 22.

³ Planteamiento erróneo, a mi parecer, de la doctrina española preconstitucional. En concreto Gómez Orbaneja, E. y V. Herce Quemada, *Derecho procesal penal*, Madrid, 1984, p. 7.

⁴ Cfr. Lorca Navarrete, A. Ma., *op. cit.*, p. 23.

represivo a que pueda quedar sometido el condenado a través de la ejecución de la pena en los diversos establecimientos penitenciarios, sino además —y en un momento anterior— del que pueda ser objeto en el proceso mismo, porque teóricamente aún se justifica por la doctrina que el fin del proceso penal ha de ser siempre práctico o dirigido a “encontrar” un culpable. Ciertamente, ese planteamiento o lo que pueda entrañar su formulación no es en mi opinión, mantenible, y ello porque el derecho a castigar del Estado, de existir, no nace con el hecho punible, sino con la sentencia condenatoria, esto es, después del proceso, no con el proceso, por lo que no estaría de más despojar de una vez por todas al proceso penal de “finalidades” que por dogmáticas pugnan o pueden pugnar con una situación de respeto con los derechos fundamentales de la persona a través del proceso mismo. Por ello y al binomio fin del proceso-imposición de la pena, es necesario contraponer la síntesis proceso penal-derechos humanos, como consecuencia del nuevo tratamiento que se debe otorgar a la realización jurisdiccional de la norma penal en perfecta sintonía con el Convenio Europeo sobre Derechos Humanos de 4 de noviembre de 1950 que ha entrado a formar parte del derecho interno español el 4 de octubre de 1979 y, por tanto, con plena acogida de la jurisprudencia emanada en el ámbito penal del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos; o como en el caso americano con amplia acogida de la Convención sobre Derechos Humanos de San José de Costa Rica y en concreto su artículo octavo.

En segundo término también es necesario desterrar la idea de que la finalidad del proceso penal sea llevar a cabo la realización jurisdiccional de la norma sustantiva penal, esto es, que mediante aquél se lleve a cabo la aplicación al caso concreto del específico artículo del código penal respectivo.⁵ En tal sentido es común predicar del proceso penal su carácter instrumental y esto es falso,⁶ puesto que su fin no es llevar a cabo la realización jurisdiccional de la norma sustantiva penal sino que aquél debe atender fundamentalmente a hacer posible la validez de los actos procesales penales con las garantías que la respectiva ley procesal estatal establezca de conformidad, además, con las propias garantías constitucionales emanadas de la norma Constitucional o del Tribunal o corte interpretadora de la misma.⁷ En esta nueva dimensión de respeto a los derechos humanos a través de las garantías que el propio proceso establece, es en donde es preciso encontrar el

⁵ *Idem*, p. 19 y 20.

⁶ *Idem*, p. 20.

⁷ *Idem*, p. 20.

agotamiento de la finalidad que persigue el proceso penal. Y en esa finalidad, no cabe duda, que el mismo proceso penal ni es instrumental ni secundario.

III. RECAPITULACIÓN

En consecuencia, la finalidad del proceso penal no es práctica, es simplemente la de realizar la función jurisdiccional penal a través de la administración de la justicia, sin que apriorísticamente sea o deba ser necesario acudir al binomio "proceso-pena". Como bien señala el artículo 117.3 de la Constitución española (C.), el primer fin —práctico o no— del proceso es el de "juzgar" y luego, en su caso, ejecutar lo juzgado. De este modo y junto a la función de administrar justicia aparece, además, la finalidad de ejecutarla como una manifestación más de carácter jurisdiccional, sin que deba distinguirse, por lo demás, entre "ejecución" y "cumplimiento" de la condena. Desde la perspectiva jurisdiccional, ambas actividades van unidas indisolublemente, y es además así porque sólo cuando ejecución y cumplimiento impliquen una sola cosa es cuando el mandato constitucional de la reeducación social y reinserción de las penas privativas de libertad podrá posibilitarse (artículo 25.2 C.) a través del control que realizan jueces de vigilancia penitenciaria y con los derechos que asisten a los internos en el proceso penal de ejecución y que implica jurisdiccionalmente el cumplimiento mismo de la pena, no siendo ciertamente acomodada a derecho la afirmación que realiza el artículo 990.3 L.E.Crim. de que la competencia del juez o tribunal para hacer cumplir la sentencia excluye la de cualquier autoridad gubernativa hasta que, fíjese el lector, el condenado tenga ingreso en el establecimiento penal o se traslade al lugar en donde deba cumplir la condena. Pues el "hasta que" de ese artículo 990 L.E.Crim. no es homologable y quiere establecer una frontera entre ejecución y cumplimiento de la pena que en cambio y con la C. actual española conforman un único interés⁸ jurisdiccional.

⁸ *Idem*, p. 25.